

Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada doña Sandra Negretti Castro, en representación de don Víctor Edmundo Bordones Villalobos, demandante en autos sobre declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, Rit O-63-2024, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, ministro señor Marco Antonio Flores Leyton, ministra señora Claudia Arenas González, y del abogado integrante señor Patricio Ponce Correa, quienes con fecha diecisiete de julio de 2024, confirmaron la resolución apelada que declaró la caducidad de la acción de declaración de relación laboral y despido injustificado deducidas.

Manifiesta que la decisión objetada fue pronunciada con falta o abuso, al considerar que era aplicable el artículo 168 del Código del Trabajo, no obstante, éste descansa en el entendido de una relación laboral reconocida por el empleador, sin embargo, los presupuestos fácticos en el caso de autos son diferentes, pues lo que se solicita en primer lugar es la declaración de existencia de una relación laboral que se extendió entre el 16 de febrero de 2016 hasta el 27 de diciembre de 2023, y de aquello se desprenden las demás acciones deducidas, por lo que era procedente aplicar lo dispuesto en el inciso primero del artículo 510 del Estatuto Laboral, lo que ha sido reconocido por esta Corte, entre otros, en los roles N° 45.058-2021 y N° 1.994-2022, al tratarse de derechos mínimos predeterminados.

Agrega que también hay falta o abuso grave en la dictación de la resolución, al impedir al demandante acceder de manera efectiva a la tutela judicial, y consecuentemente, al debido proceso, además, que frente a dos interpretaciones en principio divergentes se debe preferir y aplicar aquella que resulta más favorable al trabajador como manifestación del principio protector.

Solicita se acoja el recurso, y, por consiguiente, el de apelación deducido, disponiendo dar curso progresivo a los autos, citando a nueva audiencia preparatoria ante juez no inhabilitado.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente confirmaron la resolución que declaró la caducidad de las acciones interpuestas, pues se coincidió con la conclusión del tribunal de instancia, en cuanto la apelación versó únicamente respecto a un presunto error respecto a la fecha de término de la relación laboral, así como que la magistratura *a quo* no se encontraba en condiciones de resolver al no contar con todos los antecedentes, toda vez que el término del vínculo entre la partes según se indica en el libelo fue



el 27 de diciembre de 2023, en tanto que la demanda se presentó el 8 de marzo de 2024, habiendo transcurrido 61 días hábiles, y que en cuanto a la existencia de un error en la fecha del despido fue una alegación extemporánea. A su vez, la magistratura se encontraba obligada a resolver la excepción de caducidad al fundarse en las dos circunstancias objetivas señaladas, por lo que las alegaciones en el recurso escapan al debate que se suscitó en segunda instancia, por lo que estiman no haber incurrido en falta o abuso en la resolución cuestionada.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, al efecto, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional y del registro de audio se advierte que:

a) El 8 de marzo de 2024 don Víctor Edmundo Bordones Villalobos demandó al Hospital Regional de Arica y Parinacota "Dr. Juan Noe Crevani". Señala que ingresó a prestar servicios bajo la apariencia de contratos regulados por la Ley N° 18.884, desde el 16 de febrero de 2016 hasta el 27 de diciembre de 2023, y que finalizó mediante despido verbal.

b) El demandante no interpuso reclamo administrativo.

c) La judicatura de instancia, en la audiencia preparatoria celebrada el 3 de junio de 2024, y luego de hacer un resumen de la excepción de caducidad interpuesta por la demandada, le otorgó traslado a la demandante quien señaló entre otros argumentos, que a la situación le era aplicable lo dispuesto en el



artículo 510 del Código del Trabajo, y al resolver el tribunal, estimó también entre otros fundamentos que no era aplicable tal norma, pues se refiere a derechos que se encuentran regulados por el Código Laboral, cuyo no es el caso, y al verificar que entre la fecha del despido, el 27 de diciembre de 2023, y la fecha de presentación de la demanda, el 8 de marzo de 2024, transcurrió el plazo previsto en el artículo 168 del Estatuto del ramo, declaró caducada las acciones de declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, interponiéndose en contra de tal decisión recurso de apelación.

d) La Corte de Apelaciones de Arica, conociendo de la apelación de la resolución precedente, por sentencia de 17 de julio de 2024, la confirmó.

Séptimo: Que, como consta de la resolución impugnada y de los antecedentes del proceso, la demanda tiene por objeto que se declare la relación laboral. Tal precisión es relevante, pues se controvierte expresamente la existencia de un vínculo laboral entre las partes, y, consecuentemente, la existencia del despido que el actor alega, lo que se evidencia de la relación de los hechos que se efectúa en la demanda y de lo aseverado por la demandada, de tal modo que no es procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, respecto de un período cuya naturaleza laboral está controvertida y que no aún no ha sido asentada por la judicatura del ramo.

Por consiguiente, la acción de declaración de relación laboral y la de despido injustificado derivada, precisamente, de un vínculo cuya real naturaleza forma parte del conflicto sometido al conocimiento de la judicatura laboral, queda supeditada, en los aspectos sustantivos y adjetivos, incluido el plazo para su interposición a la primera, pues no puede existir en forma independiente de aquella, y cuyo plazo para su ejercicio no puede sino contabilizarse desde concluyó, de acuerdo al inciso primero del artículo 510 del Estatuto Laboral.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, esta Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sosteniendo que el plazo de prescripción de la acción para la declaración de una relación laboral es de dos años y que se contabiliza desde el término del vínculo. Así lo ha dicho en las sentencias dictadas en las causas Rol N° 43766-2017, 43763-2017, entre otras, y más recientemente, en los antecedentes N° 104276-2020, 45058-2021 y 1994-2022, en la última de las cuales se razonó que *“no es dable exigirle (al trabajador) que deduzca su acción de reconocimiento de la relación como laboral, bajo subordinación y dependencia, durante la vigencia de la misma al verse expuesto a represalias por parte del empleador e incluso el término de la relación laboral decidida por éste último, pudiendo terminar con la pérdida de su fuente de trabajo y las prestaciones alimentarias que derivan de ésta. Por consiguiente, el derecho a reclamar el*



reconocimiento de una relación laboral que es desconocida por el empleador puede ser impetrada no sólo durante toda su vigencia, sino también después de su finalización, pero en ambos casos, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del cuerpo legal citado”; mismo criterio que motiva las decisiones anteriores.

Noveno: Que, en consecuencia, los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al transgredir lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo y estimar que el plazo de prescripción de las acciones de declaración de relación laboral y despido injustificado era el previsto en el artículo 168 del Código del ramo, sin considerar que, en la especie, el ejercicio de la primera tiene por objeto determinar la verdadera naturaleza del vínculo, y cuyo término para plantearla es el de dos años desde la conclusión de los servicios, mismo, que, por consiguiente, debe extenderse a la acción de despido injustificado que tiene como fundamento y antecedente esa controversia previa, la que no puede ser resuelta sino una vez decidido lo anterior.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Arica, ministro señor Marco Antonio Flores Leyton, ministra señora Claudia Arenas González, y del abogado integrante señor Patricio Ponce Correa, por haber dictado con falta o abuso la resolución de diecisiete de julio último, y, en consecuencia, se la deja sin efecto y se decide, conforme lo previamente razonado, que **se revoca** la sentencia interlocutoria de tres de junio de dos mil veinticuatro, dictada en los autos RIT O-63-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, en cuanto declaró la excepción de caducidad de las acciones de declaración de relación laboral y despido injustificado, y se la rechaza, debiendo el tribunal dar curso, a las acciones deducidas, para lo cual deberá citar a audiencia preparatoria ante juez no inhabilitado.

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por no existir mérito suficiente para ello.

Regístrese y archívese.

N°30.311-24.-





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Mario Carroza E., Ministra Suplente Dobra Francisca Lusic N. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dos de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

